

INFORMARTIVO DE RELATORIA

SEPTIEMBRE 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto	Acción de Tutela <u>11001-03-15-000-2024-01774-00</u> Sentencia del 18 de julio de 2024
<p>El Alto Tribunal falló a favor de Martha Lucía Velásquez Aristizábal, una vendedora informal de Manizales, reconociendo la vulneración de sus derechos al trabajo, mínimo vital e igualdad tras el desalojo de su caseta.</p> <p>La sentencia destaca la falta de notificación adecuada y ordena a la Alcaldía ofrecer una alternativa económica o de reubicación. Además, subraya la necesidad de proteger a los vendedores informales, considerando su vulnerabilidad económica y los efectos de los desalojos en sus derechos fundamentales.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C.P. María Adriana Marín	Acción de Tutela <u>11001-03-15-000-2024-04198-00</u> Sentencia del 13 de septiembre de 2024
<p>El Alto Tribunal conoció acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del Cesar por la comunidad indígena Arhuaca de Ikarwa en el trámite del medio de control de protección a los derechos e intereses colectivos en el que solicitaba suspender el proyecto hidroeléctrico Los Besotes.</p> <p>Consideró la Sección, que el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó solicitud de realizar audiencias de forma presencial, interpretando rígidamente la Ley 2213 de 2022, sin considerar las barreras tecnológicas y culturales de la comunidad, que realizó audiencias virtuales sin la presencia del actor, ignorando normas que protegen el acceso de grupos étnicos al sistema judicial.</p> <p>La Sala amparó los derechos al debido proceso, acceso a la justicia y diversidad étnica de la comunidad Ikarwa, dejó sin efectos providencias dictadas en desarrollo de dichas actuaciones y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de realizar de manera presencial audiencia especial de pacto de cumplimiento.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda	Nulidad y Restablecimiento del Derecho <u>41001-23-33-000-2015-00256-01</u>

C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar	(0473-2018) Sentencia del 29 de mayo de 2024
<p>La Sección conoció asunto en el que la UGPP apeló sentencia que otorgaba la pensión gracia a docente, argumentando que no cumplió con los 20 años de servicio requeridos por la Ley 114 de 1913. La Sala revocó el fallo inicial, confirmando que la invalidez no exime del cumplimiento de este requisito.</p> <p>Consideró la Corporación que, aunque el docente perdió el 85% de su capacidad laboral y superó las tres cuartas partes del tiempo exigido, no completó los 20 años necesarios.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves	Nulidad 11001032500020130165400 (4252-2013) 11001-03-25-000-2013-01645-00 (4223-2013) ACUMULADO Sentencia del 12 de septiembre de 2024
<p>La Sección anuló la Circular SAC13-24 que limitaba las licencias no remuneradas para funcionarios judiciales a un máximo de dos años en total. La Sala declaró que estas licencias pueden solicitarse múltiples veces, cada una por hasta dos años, sin exigir el regreso al cargo original. Se consideró que la circular excedía la competencia reglamentaria y violaba principios favorables al trabajador.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas	Acción de Controversias Contractuales 05001-23-31-000-2011-01952-01 (62082) Sentencia del 23 de agosto de 2024
<p>La Sala conoció demanda de una aseguradora contra Empresas Públicas de Medellín cuestionando cláusulas del pliego de condiciones que otorgaban potestades exorbitantes y solicitando la anulación de resoluciones que declararon incumplimiento contractual. EPM presentó demanda de reconvención.</p> <p>La Sala determinó que EPM actuó dentro de sus competencias al declarar el riesgo de incumplimiento, sin exceder el marco común de obligaciones impuestas por aseguradoras. Consideró que, las disposiciones del pliego, aceptadas por el contratista, no requerían competencias especiales más allá del acuerdo entre las</p>	

partes, concluyó que estas disposiciones no contradicen el ordenamiento jurídico aplicable y reiteró que los contratos de empresas de servicios públicos se rigen por el derecho común, salvo excepciones legales.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Cristina Pardo Schlesinger	Sentencia T-269 del 10 de julio de 2024
<p>En un caso de reparación directa, la Sala Octava de Revisión protegió los derechos al debido proceso y acceso a la justicia de María, quien demandó al Ejército Nacional por una lesión cerebral que sufrió su hijo Oscar durante el servicio militar.</p> <p>La Corte determinó que el tribunal no valoró adecuadamente las pruebas al computar la caducidad desde la primera atención médica (2012), cuando debió considerarse el dictamen de pérdida de capacidad laboral (2016), momento en que María pudo conocer con certeza el daño.</p> <p>La decisión ordenó al tribunal emitir un nuevo fallo, flexibilizando el cómputo de caducidad desde una perspectiva constitucional.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-306 del 26 de julio de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión estudió el caso de Alfonso, quien fue despedido por dar positivo en una prueba de detección de marihuana mientras trabajaba operando un puente grúa.</p> <p>La Corte determinó que, aunque el consumo de sustancias psicoactivas está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad en ámbitos privados, cuando impacta la seguridad laboral, el empleador puede tomar medidas disciplinarias.</p> <p>El despido se consideró justificado porque la empresa demostró que el consumo afectaba el desempeño laboral, aumentaba riesgos en un entorno peligroso y el trabajador ignoró capacitaciones previas sobre estos riesgos.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Vladimir Fernández Andrade.	Sentencia T-264 del 09 de julio de 2024
<p>La Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos a la salud y vida digna de un niño de 10 años con tumor cerebral maligno, ordenando a EPS Compensar suministrar el medicamento Imatinib, inicialmente negado por no estar indicado por el INVIMA para su enfermedad.</p>	

La Corte determinó que, aunque el fármaco no está registrado para esta patología específica, existe suficiente evidencia científica respaldada por 12 especialistas oncológicos, estudios clínicos y su reconocimiento por la OMS como medicamento esencial.

Se ordenó al Ministerio de Salud facilitar los trámites y reportar al INVIMA este uso fuera de registro para su inclusión oficial.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia T-192 del 24 de mayo de 2024
<p>La Sala Quinta de Revisión estudió tres tutelas de servidoras públicas sobre traslados laborales. La Corte estableció que, aunque existe facultad discrecional administrativa para realizar traslados, las entidades deben motivar sus decisiones considerando circunstancias particulares como salud familiar, riesgos de integridad y unidad familiar.</p> <p>En el primer caso (Fiscalía), se declaró carencia de objeto por hecho superado. En los otros dos casos (Ejército y solicitud de traslado), la Corte amparó el derecho a la unidad familiar y ordenó a las entidades realizar una nueva evaluación, considerando que las decisiones iniciales no contemplaron las circunstancias particulares de las accionantes.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-326 del 06 de agosto de 2024
<p>La Sala Tercera de Revisión estudió dos tutelas sobre estabilidad ocupacional reforzada. El primer caso, Camila con cáncer de mama, cuyo contrato no fue renovado por la Unidad Prestadora de Salud del Atlántico; el segundo, Francisco, despedido de un lavadero de autos estando incapacitado por accidente laboral.</p> <p>La Corte amparó los derechos en ambos casos, estableciendo que la estabilidad ocupacional reforzada aplica también a contratos de prestación de servicios.</p> <p>Ordenó renovar los contratos, pagar honorarios dejados de percibir y una indemnización de 180 días, destacando especialmente la protección reforzada para mujeres debido a desigualdades estructurales existentes.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-334 del 12 de agosto de 2024
<p>La Sala Tercera de Revisión falló a favor de una mujer de 84 años, amparando sus derechos al debido proceso y seguridad social, después de que Colpensiones le negara la pensión de sobreviviente tras el fallecimiento de su compañero permanente.</p> <p>A pesar de tener más de 30 años de convivencia y el reconocimiento del hijo discapacitado del causante, la entidad desconoció su condición de compañera permanente y adelantó una investigación por presunta falsedad documental.</p> <p>La Corte ordenó a Colpensiones reconocer el 50% de la pensión, considerando el enfoque diferencial por la edad avanzada de la accionante.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-313 del 31 de julio de 2024
<p>La Sala Tercera de Revisión protegió los derechos de un funcionario provisional del ICA que fue desvinculado por un nombramiento de carrera administrativa.</p> <p>Aunque la Corte reiteró que el mérito es fundamental para acceder a cargos públicos, enfatizó que existe protección especial para personas vulnerables en provisionalidad. El funcionario, como padre cabeza de hogar, mantenía a su esposa enferma y dos hijos discapacitados.</p> <p>La Sala ordenó al ICA reubicarlo en un cargo equivalente, actualizar datos sociodemográficos de funcionarios vulnerables e implementar políticas de protección para padres y madres cabeza de hogar.</p>	